

I

La consulta plantea si resulta conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, la comunicación al Defensor Universitario de los datos que serán necesarios para el ejercicio de sus funciones, tanto por parte del propio Centro Universitario como por terceras entidades que hubieran contratado servicios con el mismo o incluso otras entidades independientes a la propia Universidad que no mantengan con la misma ningún tipo de vínculo contractual.

II

Como cuestión previa, es preciso indicar que la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, dispone que “para velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las Universidades establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones, siempre dirigidas hacia la mejora de la calidad universitaria en todos sus ámbitos, no estarán sometidas a mandato imperativo de ninguna instancia universitaria y vendrán regidas por los principios de independencia y autonomía”, añadiendo que “corresponderá a los Estatutos establecer el procedimiento para su elección o designación, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento”.

Este precepto es reiterado por la disposición adicional sexta de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, de Universidades de A., que dispone que “con el objeto de velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios, las Universidades andaluzas establecerán en su estructura organizativa la figura del Defensor Universitario. Sus actuaciones estarán regidas por los principios de independencia y autonomía funcional. Los Estatutos establecerán el procedimiento para su elección, duración de su mandato y dedicación, así como su régimen de funcionamiento”.

En el concreto supuesto planteado, el régimen del Defensor Universitario de la Universidad de H. se encuentra regulado por el Título VIII de sus Estatutos, aprobados por Decreto 299/2003, de 21 octubre, al que luego se hará referencia.

III

Lo que se acaba de indicar resulta relevante para analizar la naturaleza de la transmisión al Defensor Universitario de los datos necesarios para el ejercicio de sus funciones, dado que la misma únicamente tendrá la consideración de cesión o comunicación de datos en los supuestos en que dicha transmisión provenga de una tercera entidad distinta de la propia Universidad en cuya estructura organizativa se encuentra incardinado el Defensor.

De este modo, las normas contenidas en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999 únicamente será aplicables en los supuestos en que los datos sean reclamados de terceras entidades que, además, no tengan la condición de encargados del tratamiento de la propia Universidad.

No obstante, ello no implica que el Defensor Universitario pudiera recabar cualquier información de los órganos de la Universidad, dado que el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”, añadiendo el artículo 4.2 que “Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos”. Además, el artículo 6.1 de la Ley Orgánica dispone que “El tratamiento de los datos de carácter personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la Ley disponga otra cosa”

En consecuencia, la transmisión de los datos al Defensor Universitario será lícita en caso de que la misma aparezca vinculada a las funciones atribuidas a aquél, si la transmisión se produce en el marco del Centro Universitario, o si la cesión resulta lícita al amparo de la Ley Orgánica 15/1999, en caso de proceder los datos de terceras entidades.

IV

Dicho lo anterior, y refiriéndonos a la primera de las cuestiones a las que se hace referencia en la consulta, referida a las cesiones de datos, el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que “Los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. No obstante, esta cesión no requerirá el consentimiento del afectado, según prevé el artículo 11.2 cuando “la cesión está autorizada en una Ley” (apartado a) o “la comunicación que deba efectuarse tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, el Ministerio Fiscal o los Jueces o Tribunales o el Tribunal de Cuentas,

en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas. Tampoco será preciso el consentimiento cuando la comunicación tenga como destinatario a instituciones autonómicas con funciones análogas al Defensor del Pueblo o al Tribunal de Cuentas” (apartado d).

Frente a lo indicado en la consulta, no cabe, a nuestro juicio, incluir al Defensor Universitario en la lista tasada de cesionarios a la que se refiere el artículo 11.2 d), dada la naturaleza que a los mismos atribuye nuestro Ordenamiento Jurídico.

En este sentido, el mencionado precepto únicamente incluye a los Órganos del Poder Judicial y a determinados Órganos Constitucionales, así como a las instituciones de igual naturaleza incluidas en la correspondiente regulación autonómica. Dicho Órganos no pueden, como se indica en la consulta, equipararse al Defensor Universitario, como órgano integrado en la estructura organizativa de la Universidad, carente incluso de personalidad jurídica.

Sin embargo, ello no sería óbice para considerar que la comunicación de datos podría encontrarse amparada en lo dispuesto en una norma con rango de Ley. Es decir, si bien el artículo 11.2 d) no podría en ningún caso ser aplicable al supuesto analizado en la consulta, el mismo podría encontrarse amparado en el artículo 11.2 a).

Al propio tiempo, y dentro del marco del propio Centro Universitario, la transmisión al Defensor Universitario de datos obrantes en los ficheros de otros órganos de la Universidad sería posible en caso de que una norma con rango de Ley amparase el tratamiento por el mismo, tal y como indica el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, al que ya se hizo referencia.

En resumidas cuentas, la transmisión al Defensor Universitario de los datos a los que se refiere la consulta será posible siempre que exista una norma con rango de Ley que la ampare, sea dicha transmisión o no una cesión o comunicación de datos personales.

V

Como ya se indicó, la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001, reiterada por la normativa autonómica con rango de Ley, delimita las funciones del Defensor Universitario, al disponer que corresponde a aquél “velar por el respeto a los derechos y las libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios”.

Si bien esta norma no establece expresamente que en el ejercicio de sus funciones el Defensor Universitario podrá recabar cuantos antecedentes o datos resulten necesarios para el logro de las mismas, se desprende directamente del precepto que, en caso contrario, resultará imposible dicho ejercicio, de modo que podría considerarse amparada por la Ley la comunicación por terceros o transmisión por otros órganos de los datos que directamente se encuentren vinculados al cumplimiento de las funciones atribuidas por la Ley Orgánica 6/2001, que constituirán la finalidad del tratamiento que sea llevado a cabo por el Defensor Universitario.

En particular, y siempre dentro del marco establecido en la Ley Orgánica 6/2001, los Estatutos de la Universidad de H. señalan, en su artículo 230, que el Defensor Universitario “podrá supervisar la actividad de la Administración universitaria dando cuenta al Claustro” (artículo 230).

Asimismo, dispone el artículo 235 que “el Defensor Universitario, en el marco de lo establecido en estos Estatutos, supervisará la actuación administrativa de la Universidad de H., a la luz de lo establecido en el artículo 103, apartado primero, de la Constitución, cuidando, de oficio o a instancia de parte, que quede garantizado el exacto cumplimiento de los derechos y deberes de los miembros de la comunidad universitaria, para evitar situaciones de arbitrariedad”. Igualmente, según el artículo 236, en relación con las quejas sobre las que esté pendiente un proceso jurisdiccional, un expediente disciplinario administrativo, se indica que el Defensor podrá llevar a cabo “la investigación relativa a los problemas generales planteados en conexión con las quejas”.

Como consecuencia de las funciones a las que se ha hecho referencia, que resultan ser trasunto de las establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, el artículo 237 de los Estatutos de la Universidad H. disponen que “todos los órganos y miembros de la comunidad universitaria están obligados a auxiliar, con carácter preferente y urgente, al Defensor Universitario en el ejercicio de sus funciones. A estos efectos, no podrá negársele el acceso a ningún expediente o documentación administrativa que se encuentre relacionada con el objeto de la investigación, sin perjuicio de lo que disponga la legislación vigente respecto de los documentos secretos o reservados”.

De esta previsión, que como se dijo se infiere de las propias funciones atribuidas al Defensor en la Ley Orgánica 6/2001 y en la Ley andaluza 15/2003 se desprende que el Defensor Universitario podrá acceder a la información obrante en el marco de la propia Universidad que se necesaria para el ejercicio de sus funciones de investigación y que “se encuentre relacionada con el objeto de la investigación”, siempre que no exista otra norma que impida el mencionado acceso.

En cuanto a la comunicación de los datos objeto de tratamiento por terceras entidades, los Estatutos no establecen ninguna previsión similar al artículo 237, limitado a la “comunidad universitaria”, si bien sería posible que dicha información pudiera ser comunicada al Defensor, siempre y cuando resulte justificado que la misma es imprescindible para el ejercicio de las competencias que le atribuye la Ley Orgánica 6/2001, teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, consagrado en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, reproducido en un lugar anterior de este informe.

En todo caso, conforme exige el artículo 4.2 de la Ley Orgánica 15/1999, también anteriormente reproducido, el Defensor Universitario únicamente podrá tratar los datos de que tenga conocimiento para el desarrollo de las funciones de investigación que la Ley le otorga, sin que sea posible la utilización de los datos para ninguna otra finalidad.

VI

A la vista de todo lo anterior, cabe deducir las siguientes conclusiones:

- No será aplicable al supuesto planteado lo dispuesto en el artículo 11.2 d) de la Ley Orgánica 15/1999.
- El Defensor Universitario podrá recabar de otros órganos de la Universidad y de las entidades que tengan la condición de encargado del tratamiento de la misma los datos que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones, al encontrarse dicha utilización amparada por el artículo 6.1 de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con la disposición adicional decimocuarta de la Ley Orgánica 6/2001 y la disposición adicional sexta de la Ley andaluza 15/2003.
- La comunicación por terceras entidades de datos al Defensor Universitario para el ejercicio de las funciones que le atribuye el ordenamiento se encontrará amparada por el artículo 11.2 a) de la Ley Orgánica 15/1999, en conexión con los preceptos mencionados en el apartado anterior.
- En todo caso, los datos a los que se refieren los apartados anteriores deberán ser los adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ejercicio por el defensor universitario de las funciones establecidas en la Ley Orgánica 6/2001, no siendo lícito el tratamiento para ninguna otra finalidad.